



Sra. Salgueiro Cortiñas, Presidenta

Sr. Estella Hoyos, Consejero

Sr. Fernández Costales, Consejero

Sr. Pérez Solano, Consejero

Sr. Quijano González, Consejero y
Ponente

Sr. Nalda García, Consejero

Sr. Madrid López, Consejero

Sr. Besteiro Rivas, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Valladolid el día 10 de febrero de 2005, ha examinado el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxxxxxxxxxxxxx*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 18 de enero de 2005 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxxxxxxxxxxxxx debido a los daños ocasionados por el jabalí en diversas parcelas de cultivo*.

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 20 de enero de 2005, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 79/2005, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre. Turnado por la Sra. Presidenta del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Quijano González.

Primero.- Con fecha 8 de julio de 2003, se registra en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León una reclamación de indemnización, presentada por D. xxxxxxxxxxxxxxxx, debido a los daños producidos por el jabalí en las parcelas números 461, 462, 332, 359, 449, 10351 y 30337 del polígono 1, situadas en los parajes xxxxxx y xxxxxxxxxxx, en el término municipal de xxxxxxxxxxx, dentro de la Reserva Regional de Caza de xxxxxxxxxxx.



Se estima que los daños se produjeron “durante todo el invierno y primavera”.

El día 6 de julio de 2003 el personal adscrito a la reserva señala en su informe lo siguiente: “Todas las fincas de centeno se las han comido durante todo el invierno y la primavera, viéndose los retoños que no van a echar grano alguno. Las fincas de trigo no se las han comido, excepto las pisadas y sastrones que se están produciendo permanentemente”.

En la solicitud de indemnización no se realiza propuesta de valoración por la dirección técnica de la reserva regional de caza.

Segundo.- Con fecha 8 de julio de 2003, el Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente solicita un informe por el que se proceda a la valoración de los daños causados por el jabalí en las fincas sembradas de cereal, propiedad del reclamante, petición que se reitera con fecha 14 de enero de 2004.

Dicho informe es emitido por el ingeniero técnico agrícola, y en él se consigna que la inspección y cuantificación de los daños se realizó el 17 de julio de 2003 y que la valoración de los mismos, realizada el 26 de enero de 2004, asciende a la cantidad de 2.576,85 euros.

Asimismo, el 19 de diciembre de 2002 se requiere al interesado para que acredite la propiedad de las fincas afectadas, con rótulo y los respectivos planos o cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de que está legitimado para reclamar los daños que se han producido en las parcelas relacionadas, aportando éste con tal fin, el 29 de diciembre de 2002, los planos de las fincas afectadas y la solicitud de ayuda de la PAC para el ejercicio de 2003.

Tercero.- El 6 de abril de 2004 el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud del artículo 19 del Decreto 297/1999, de 18 de noviembre, de atribución de competencias de la Junta de Castilla y León al Consejero de Medio Ambiente y de desconcentración de otras en sus órganos directivos centrales y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, nombra Instructor del expediente, recibiendo la notificación el interesado el 16 de abril de 2004.



Cuarto.- Mediante escrito, de fecha 10 de mayo de 2004, concluida la instrucción del expediente, se da audiencia del mismo al interesado (recibiendo la notificación el día 14 de mayo), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, a efectos de que formule las alegaciones y presente los documentos y justificaciones que estime oportunos, sin que el interesado, durante el plazo concedido al efecto, haya presentado escrito de alegaciones o documentación alguna.

Quinto.- La propuesta de resolución, de fecha 21 de junio 2004, señala que procede estimar la reclamación presentada por D. xxxxxxxxxxxxxxxx, reconociéndole el derecho a ser indemnizado en la cuantía de 2.576,85 euros.

Sexto.- El 4 de agosto de 2004 la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León informa favorablemente sobre la propuesta estimatoria.

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla B), apartado g), del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.

2ª.- El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las



Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

No obstante, es preciso destacar que se ha producido una demora injustificada en la tramitación del procedimiento, teniendo en cuenta que la reclamación se interpone con fecha 8 de julio de 2003 y la propuesta de resolución no ha sido redactada hasta el 21 de junio de 2004.

De igual manera hay que llamar la atención sobre el excesivo tiempo transcurrido entre la elaboración de dicha propuesta de resolución (informada por la Asesoría Jurídica el 4 de agosto de 2004) y la remisión a este Consejo Consultivo para la emisión del preceptivo dictamen, cuya entrada se produjo el 20 de enero de 2005. Este retraso necesariamente ha de considerarse como una vulneración por parte de la Administración de los principios y criterios relativos a su actuación contemplados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como los de eficacia, celeridad, eficiencia y servicio a los ciudadanos, entre otros, sin olvidar el incremento económico que va a suponer para la Administración abonar al reclamante la indemnización actualizada como consecuencia de la tardanza en la resolución del procedimiento.

3ª.- Concurren en el interesado los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la referida Ley 30/1992. La competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, en virtud de lo establecido en los artículos 142.2 de la mencionada Ley 30/1992 y 19 del Decreto 297/1999, de 18 de noviembre, de atribución de competencias de la Junta de Castilla y León al Consejero de Medio Ambiente y de desconcentración de otras en sus órganos directivos centrales y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.

4ª.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que “los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La referencia constitucional a la Ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la que además se remite el artículo 82.1 de la Ley 3/2001, de 3 de



julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 1 de marzo, 21 de abril y 29 de octubre de 1998; 28 de enero de 1999; 1 y 25 de octubre de 1999), así como la doctrina del Consejo de Estado (Dictámenes de 27 de marzo de 2003, expediente nº 183/2003; 6 de febrero de 2003, expediente nº 3583/2002; y 9 de enero de 2003, expediente nº 3251/2002), la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la Ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

5ª.- El asunto sometido a consulta versa sobre reclamación de indemnización, presentada por D. xxxxxxxxxxxxxxxx, debido a los daños producidos por el jabalí en las parcelas números 461, 462, 332, 359, 449, 10351 y 30337 del polígono 1, situadas en los parajes xxxxxxxxxxxx y xxxxxxxx, en el término municipal de xxxxxxxxxxxxxxxx, dentro de la Reserva Regional de Caza de xxxxxxxxxxxxxxxx.



El interesado ha ejercitado su derecho en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En efecto, consta que lo hizo con fecha 8 de julio de 2003, antes de transcurrir un año desde la fecha del hecho causante, que tuvo lugar –según el informe del personal adscrito a la reserva– durante todo el invierno y primavera (suponemos que serán los inmediatamente anteriores al momento en que se interpuso la reclamación).

6ª.- En cuanto al fondo de la cuestión planteada estima este Consejo Consultivo, de igual modo que los órganos que han informado previamente, que existe responsabilidad por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por los daños causados.

El jabalí tiene la consideración de especie cinegética de caza mayor, tal y como se deduce del anexo del Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el que se declaran las especies cinegéticas de Castilla y León. Además, se considera pieza de caza, según el artículo 9 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, y de acuerdo con las órdenes anuales de caza de la Consejería de Medio Ambiente.

El régimen de responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se regula en el artículo 12 de de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, que establece en su primer apartado: “La responsabilidad de los daños producidos por las piezas de caza, excepto cuando el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá:

»a) En los terrenos cinegéticos, a quien ostente la titularidad cinegética de dichos terrenos, independientemente de que las piezas de caza pertenezcan a una especie incluida o no en el correspondiente plan de aprovechamiento cinegético (...)”.

El lugar donde se produjeron los daños se encuentra en terrenos dentro de los límites de la Reserva Regional de Caza de xxxxxxxxxx, de la que es titular la Junta de Castilla y León.

En este caso, teniendo en cuenta el informe de los celadores que suscriben la reclamación y el del ingeniero técnico agrícola relativo a la cuantificación y valoración de los daños, está acreditado que los daños fueron



producidos por el jabalí (caza mayor), procedente de la Reserva Regional de Caza de xxxxxxxxxxxxxxxx.

Por tanto, la Junta de Castilla y León debe indemnizar en la cuantía de 2.576,85 euros. Todo ello sin perjuicio de que el importe de la indemnización deberá actualizarse a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

III CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución estimatoria en el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxxxxxxxxxxxxx debido a los daños ocasionados por el jabalí en diversas parcelas de cultivo.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.